



PRESENTACION

Instituto de Estudios Políticos
Iefe Unidad de Documentación

El fenómeno de violencia expresado en la confrontación entre Gobierno-ejército y guerrilla debe ser reconocido, asimilado y superado, con la responsabilidad que corresponde a la trascendencia e incidencia que tiene en nuestra crisis actual.

La falta de voluntad política, la posibilidad de diálogos regionales frente al manejo centralizado y exclusivo del Gobierno, el cese al fuego bilateral o unilateral, la no práctica del secuestro y la extorsión, se constituyen, en su dinámica dentro del proceso de confrontación, en las causas del fracaso del proceso.

La violencia en el país, a pesar de haber sido reconocida por todos como el fenómeno básico y fundamental de la crisis que se vive, jamás ha sido asimilada, introyectada por la sociedad y, particularmente, por el Gobierno y la guerrilla en su real dimensión. En este sentido, asistimos a lo que se puede denominar un vacío en la fuerza de reconocimiento de la trascendencia del fenómeno.

Paralelamente, se da una grave acentuación del juego de afirmaciones sin contenido que poco a poco han desvalorado los significados y su relación con la realidad.

El gobierno, la guerrilla y aquellos que, de alguna manera, tienen que ver con el asunto, han utilizado las categorías mencionadas como factores causales para explicar el poco o ningún desarrollo del proceso, todas ellas sin consistencia alguna con la predisposición real y convincente para la superación del conflicto.

No existe, pues, un compromiso responsable y esencial para superar la guerra entre Gobierno y guerrilla. Ambos se han enfrascado, de manera recurrente, en discusiones sobre "procedimientos y condiciones" para el denominado diálogo, acompañados también de afirmaciones cada vez más carentes de sentido, por medio de las cuales reafirman su disposición total a un "diálogo para la paz"

Este conflicto ha sido tratado como si fuera responsabilidad exclusiva de la guerrilla y del Gobierno, característica que se convirtió en principio y axioma del Gobierno de Gaviria, por tanto, dicho tratamiento ha "oficilizado" el desconocimiento de la trascendencia real de la crisis y de los posibles caminos para su solución.

La sociedad colombiana, principal víctima de la violencia de la guerra, ha sido marginada dentro de la búsqueda de solución a la crisis. Y lo más grave es que aún dentro del diagnóstico elaborado por el Gobierno sobre la situación del país, la población civil queda irresponsablemente desconocida como el principal objeto sobre el que se ejercita la violencia de la guerra por ambas partes.

Esta problemática se trata como si no tuviera nada que ver con el hombre común y cuando se alude a la sociedad como un todo, se trata con base en afirmaciones sin fuerza ni representación, generalmente ajenas a la realidad. El hecho de que el Gobierno se manifieste celoso del manejo y la responsabilidad del proceso -lo cual desde luego es válido en sí mismo pero no con respecto a la dinámica del país- ha creado barreras para que la sociedad civil, a través de sus múltiples formas de expresión, pueda participar y comprometerse con algo que le es tan caro como su propio bienestar, su dignidad y su vida.

Aunque se ha mencionado, jamás se ha actuado bajo la consideración de que este conflicto debe pasar por los distintos estamentos de la sociedad, proyectando algún mecanismo de participación a través del cual la sociedad se comprometa y se exprese con alguna fuerza y representación, primero, respecto del conflicto y, segundo, en el proceso de búsqueda de solución al mismo. Este, que denomino el gran vacío compromisorio, la fuerza legitimadora y la condición definitiva para cualquier búsqueda de solución, va acompañado de la ausencia del Congreso de la República que, obviamente, obedece a razones diferentes de las que han marginado a la sociedad civil.

El Congreso, así como la ciudadanía, ni siquiera ha sido un convidado de piedra y su papel ha quedado reducido al de un espectador más, tal vez el más ausente de todos. El Congreso vió cómo a su alrededor danzó el Gobierno del presidente Gaviria tratando de comprometerlo, desde luego con el menor desgaste posible, en la dirección que se propuso darle al proceso. Pero el Congreso, en tanto espacio formal y político de debate para la solución de los grandes problemas del país, jamás ha sido consciente de su real responsabilidad. Aún más, se ha reafirmado sistemáticamente en la posición que avala la exclusiva responsabilidad del Gobierno en los asuntos de la paz.

El proceso de paz, así como el necesario y limitado proceso de modernización del sistema político en Colombia, constituyen dos factores que permiten medir el pulso de la trascendencia de los cambios hacia una sociedad moderna y en la búsqueda de una democracia real y eficiente. Pero hasta hoy, el balance de ambos no permite tal reconocimiento.

La forma como se ha asumido el conflicto, sobre todo, en lo que tiene que ver con esas dos fuerzas que dinamizan una sociedad con carácter moderno y democrático, esto es, la ciudadanía y el Congreso, prueba no sólo las limitaciones en cuanto al fenómeno tratado en sus expectativas y logros frustrados, sino también las limitaciones que tenemos como sociedad con características políticas, sociales y culturales modernas.

En el juego de relación que se pueda establecer entre aquellas dos condiciones podría encontrarse, indudablemente, el peso histórico que, para este país y en esta coyuntura, presenta la búsqueda de la paz. Es decir, considero que lo que está en juego en la lucha por la paz no es propiamente el triunfo de una de las partes, la eficacia de un gobierno, el aguante estratégico y logros de la guerrilla, la propiedad que una o ambas partes tengan del proceso. Por el contrario, lo que está en juego aquí es la medida, el termómetro histórico de los avances de transformación del país. En este sentido, creo que la evaluación más desprevenida muestra muy pocos logros.

Así pues, esa "marginalidad" y aislamiento del proceso de búsqueda de la paz, para el tratamiento de algo consustancial de nuestra historia moderna y de nuestro futuro, se constituye en un factor causal para el escepticismo y la incertidumbre en torno a nuestro devenir, montado en las espaldas de la violencia y de la paz.

El proceso que se reabre está cargado de grandes expectativas, pues no parece que exista otra oportunidad, so pena de caer en una desvaloración absoluta de la importancia y pertinencia de la temática en nuestro país. Los principios generales sobre los que el Gobierno ha planteado las bases para un eventual reinicio del proceso de paz, parecen apuntar, por lo menos en algunos aspectos básicos, hacia una ruptura frente a los trajinados obstáculos estratégicos para el despegue del proceso.

Los puntos sobre los que ha sustentado una apertura para el tratamiento de la temática se destacan como estímulo de esperanza hacia la consolidación del proceso. Al mismo tiempo, las voces de algunos dirigentes de los alzados en armas reafirman su voluntad política y su disposición para el diálogo por la paz.

Todo es, por lo menos hasta ahora, un juego distante entre las palabras y los hechos.

De todas maneras en la coyuntura presente queda el sabor amargo de las contradicciones dentro del propio Gobierno al plantear sus estrategias para combatir la violencia y para establecer los principios de apertura hacia la paz. El anuncio del Ministro de Defensa sobre la creación de Cooperativas de Seguridad Rurales constituyen un factor no sólo de debate sino también conflictivo, respecto de la guerra y la violencia en el campo colombiano.

La propuesta de crear una organización de esta naturaleza, la búsqueda de condiciones para el reinicio del diálogo y la abierta contradicción del Gobierno en los puntos claves para un posible reinicio del diálogo con la guerrilla, se constituyen en factores que en lugar de clarificar el panorama, tienden un manto oscuro en una sociedad saturada de un conflicto circular tanto en los hechos como en el mismo tratamiento.

Uno de los principios generales y fundamentales que está en juego en la crisis de violencia y descomposición que vive el país, hace referencia al ejercicio del monopolio de la fuerza como factor de soberanía, asentado en los principios de legalidad y legitimidad. En Colombia las condiciones para el cumplimiento de este requisito definidor del orden y la autoridad se convierten en obstáculos para la recomposición del país en términos legales y políticos.

Por eso, el sustento de la posible salida de la crisis está constituido por el rescate de la presencia del Estado y por el fortalecimiento de su fuerza para el control legal y material del país. La actual multiplicación de poderes particulares, asentados en el uso de la fuerza por la fuerza, es condición causal del círculo vicioso de descomposición del orden y de debilitamiento del Estado.

La decisión del gobierno de permitir y estimular la creación de fuerzas civiles de choque, aunque no es nueva en el país, constituye hoy un retroceso y, sobre todo, una reafirmación tácita de la imposibilidad del Gobierno para recomponerse y asumir el control organizativo del país y de las zonas de conflicto. Además, es un abierto y peligroso alinderamiento con los grupos que dinamizan la confrontación.

La dinámica de este proceso, su proyección compromisoria con la sociedad civil y el establecimiento del principio de responsabilidad vital del Congreso de la República para la búsqueda de solución del conflicto, constituyen, no una

necesidad, sino una condición sine qua non de las posibilidades para lograr la paz en sí misma y para que esta sea condición e instrumento de un futuro mejor.

La profundidad y complejidad de nuestra situación conflictiva exige que el proceso se materialice en estos dos niveles en forma diferencial. A despecho de los que hasta ahora han manejado el conflicto, aquí hay que reconocer la existencia de dos tiempos diferentes: uno referido a lo inmediato y manejable en un tiempo corto, y otro definido en el sentido estructural y de la larga duración.

Pero además, lo que ha sido punto vital de legalidad e institucionalidad gubernamental, o sea, la reserva para el control del proceso, debe ser reconsiderado para entender que este país -particularmente con referencia a la violencia, los espacios, las condiciones y referentes- responde a condiciones muy particulares y a juegos de relaciones y de fuerzas en las localidades diferenciales. Ninguno de estos cambios, desde luego, trasciende el control último y el liderazgo del Gobierno nacional.

Se trata de entender el asunto de la paz en planos diferentes, cada uno con su propia dinámica, pero entrelazados como un todo. Los factores intervinientes, y aquellos que han de ser solucionados, responden a una línea en cuyos extremos se encuentran problemas relativamente fáciles de solucionar en lo inmediato, vale decir, en la mesa de conversaciones, pero otros, si son reconocidos e integrados al proceso, presentan un carácter más complejo y estructural y sólo pueden ser solucionados sobre la base de un compromiso que responde a procesos amplios, complejos y conflictivos. Es tal vez ésta una razón que explica que ambas partes, Gobierno y guerrilla, ejercen presión en direcciones opuestas, cuando se trata de colocar sobre el tapete los temas estructurales de la sociedad: la pobreza, la propiedad, el bienestar y las reformas.

La posibilidad de transformar cualitativamente lo que hasta ahora se ha intentado hacer y no se ha hecho, puede estar dado precisamente por el hecho de mirar este conflicto en una dimensión mayor que trascienda su focalización cortada y reducida al modelo que plantea el dominio y el control final de la contraparte. En este caso ya no se trata del y triunfo de una de las dos partes, sino de la integración y proyección de esas dos fuerzas y de todas las fuerzas de la nación en una sola dirección: la construcción de nuestro futuro mediante la utilización del instrumento de la paz.

William Restrepo Riaza

Director del Instituto de Estudios Políticos